

ECUADOR

RESUMEN EJECUTIVO

La República del Ecuador es un estado constitucional de derecho, tiene un sistema multipartidario, presidente electo y legislatura unicameral. En abril de 2009, se eligió al Presidente Rafael Correa para un segundo mandato al igual que a los miembros de la Asamblea Nacional. En términos generales, las elecciones convocadas se consideraron libres y justas. En mayo, el electorado aprobó reformas a la Constitución en un proceso que también se consideró libre y justo. Las fuerzas de seguridad estuvieron subordinadas a las autoridades civiles.

Los principales abusos en materia de derechos humanos fueron el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad públicas, limitaciones a la libertad de expresión y prensa y corrupción de funcionarios. El Presidente Correa y su gobierno continuaron con ataques verbales y jurídicos a los medios y cada vez más se valieron de mecanismos legales, como las leyes de difamación, para coartar la libertad de expresión. La corrupción fue un problema generalizado, en especial en el sector judicial y los funcionarios la ejercieron con impunidad.

Los problemas de derechos humanos continuaron en los siguientes campos: delitos aislados de homicidio, condiciones precarias en las cárceles, arrestos y detenciones arbitrarios, corrupción y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad, un alto número de detenciones previas al juicio y corrupción y denegación de las garantías procesales dentro del sistema judicial. Continuaron los problemas sociales entre los que cabe citar: agresión física de periodistas, violencia contra la mujer, discriminación de la mujer, los pueblos indígenas, los afro ecuatorianos y las personas por su orientación sexual, trata de personas, explotación sexual de menores y trabajo infantil.

El gobierno en ciertas ocasiones adoptó medidas para enjuiciar o castigar a los funcionarios de los servicios de seguridad y otros ámbitos del gobierno que cometieron abusos, aunque en algunos casos, la influencia política y un sistema judicial inoperante dieron cabida a la impunidad.

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometido a:

a) Privación arbitraria o ilícita de la vida

El gobierno o sus agentes no cometieron homicidios con motivación política. Sin embargo, se presentaron informes fidedignos de que las fuerzas de seguridad, en especial la policía, emplearon excesiva fuerza y cometieron delitos aislados de homicidio. La Comisión Ecuánica de Derechos Humanos (CEDHU) recibió 38 denuncias de homicidios a manos de las fuerzas de seguridad durante todo el año.

El 25 de julio, Julio Antonio Baquerizo Reyes murió tras pasar 41 días en coma por las heridas que presuntamente le causó la policía local. Según la familia de Baquerizo, el 11 de junio, los policías Marcelo Capurro y Jonathan Obando protagonizaron un altercado doméstico, golpearon brutalmente a Baquerizo y luego huyeron. La familia presentó una denuncia que al término del año seguía en investigación.

No se registraron avances en la causa del “grupo de limpieza social” de policías en servicio activo denunciado por la unidad de Lucha contra el Crimen Organizado en 2010.

b) Desaparición

No hubo informes sobre desapariciones por motivos políticos.

Un tribunal desestimó los cargos relativos a la supuesta desaparición de Georgy Hernán Cedeño Saltos en 2009. La familia de la víctima presentó como prueba el video de una prueba rutinaria de polígrafo en que un policía confesaba haber matado a Cedeño Saltos. El tribunal resolvió que el video se había obtenido por medios ilegales y desestimó la causa por falta de pruebas (para la causa conexa de tortura véase la sección 1.c).

c. Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes

Si bien la Constitución y las leyes prohíben la tortura y formas similares de intimidación y castigo, se informa que algunos agentes de policía sometieron a tortura y abuso a sospechosos y presos, a veces con impunidad. En julio, el defensor del pueblo reconoció que “la tortura es una práctica que se ha arraigado”.

En el año, la CEDHU registró 10 casos de presunta tortura y 305 casos de “agresión física injustificada” por parte de las fuerzas de seguridad. La CEDHU informó que durante los arrestos la policía golpeó a los sospechosos y usó gas lacrimógeno, además de golpear y amenazar a los sospechosos en todos los interrogatorios para obligarlos a confesar los delitos.

El 2 de marzo, Marco Luis Sovenis, que había quedado detenido brevemente por la escolta presidencial el 26 de febrero, presentó una denuncia en la que acusaba a los guardaespaldas del presidente de haberlo golpeado. Sovenis alegó que los guardias le habían dado puñetazos y patadas.

El 6 de junio, el gobierno inició el juicio de 14 oficiales de policía dentro de la causa de tres hermanos y su padrastro, Georgy Hernán Cedeño Saltos, quienes acusaron al Grupo de Apoyo Operacional de la Policía Nacional de haberlos detenido ilegalmente y haberlos torturado en el norte de Quito en 2009. El 19 de julio, el tribunal declaró culpables a dos policías por tortura y privación ilegítima de la libertad, a otros cinco por complicidad en los mismos delitos y a otros cinco, por encubrimiento. El tribunal impuso a los policías una condena de entre dos y 10 meses de cárcel, a pesar de que la pena mínima por tortura es de tres años. Todos los acusados quedaron en libertad al poco tiempo de la condena ya que computaron el plazo de prisión preventiva como parte de la sentencia.

La ley y la Constitución reconocen el derecho de los pueblos indígenas a tener su propio sistema de justicia basado en costumbres y tradiciones. Sin embargo, hubo inquietudes de que en algunos casos los castigos indígenas, como azotes o baños con agua fría, vulneraron los derechos humanos.

Condiciones en cárceles y centros de detención

Por lo general, las condiciones en las cárceles y los centros de detención fueron precarias y tendieron a ser peores en las zonas costeras tropicales que en las zonas altas templadas. En 2010, el Ministro de

Justicia, José Serrano, declaró que los establecimientos existentes estaban superpoblados en un 93 por ciento.

En la mayoría de las cárceles el hacinamiento continuó siendo un problema. A diciembre, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) informó que en 43 establecimientos había 16.587 reclusos, en comparación con los 11.800 del año anterior. Las personas en prisión preventiva convivían con los reclusos condenados. El gobierno indicó que había 1.372 internos menores de edad pero no informó sobre el número de reclusos.

Varias prisiones registraron graves contagios de enfermedades y a menudo la atención médica fue inadecuada. El hacinamiento crónico y la falta de medidas preventivas de salud permitieron que las enfermedades se propagaran rápidamente. La atención médica que se brindó fue mínima y suficiente, únicamente para casos de emergencia. Los internos informaron que tenían que pagar sobornos para recibir atención médica y dijeron que no tenían acceso a atención odontológica. Muchos reclusos señalaron que había problemas de asma por el polvo y la contaminación y dijeron que no tenían acceso a inhaladores. La DNRS informó que en el año habían muerto 21 personas, frente a las 42 defunciones ocurridas en 2010.

Los internos informaron que sufrieron extorsión generalizada a manos de los carceleros, funcionarios de las cárceles y otros prisioneros. Se pretende que los reclusos paguen sobornos para recibir más comida o alimentos de mejor calidad, tener acceso a la clínica de la cárcel, cambiar o mejorar el lugar en que se encontraban. Algunos señalaron que las penitenciarías no tenían información del tiempo que llevaban recluidos ni de la duración de la pena que les correspondía. La mayoría de los reclusos no quedaron en libertad tras cumplir la sentencia, sino que permanecieron encarcelados entre tres y cinco meses más por ineficiencia burocrática o corrupción. En el año no mejoró el mantenimiento de registros. La mayoría de las cárceles continuaban trabajando en papel y carecían de acceso a computadoras e Internet. Los prisioneros condenados por delitos no violentos podían lograr una reducción del 50 por ciento de la pena por buena conducta y salir en libertad condicional una vez cumplido el 60 por ciento de la sentencia original. En el año no hubo cambios en las alternativas a la sentencia impuesta para delincuentes no violentos.

Según un informe de la organización no gubernamental internacional *Prisoners Abroad*, los recursos en las prisiones eran mínimos y se pretendía que los prisioneros (y sus familias) proporcionaran casi todos los colchones, ropa y medicamentos. Se proporcionaron tres comidas muy básicas al día, pero los prisioneros informaron que la calidad es muy deficiente. Solían complementar estas raciones con comida que compraban ellos mismos. Los reclusos tuvieron acceso a agua potable.

Si bien las condiciones fueron notablemente mejores en la cárcel de mujeres de Quito que en los presidios de hombres, según la CEDHU, se asignaron a guardias varones la responsabilidad de cuidar a las reclusas y ellas declararon que los guardias solicitaron favores sexuales a cambio de asistencia. Para los menores de tres años, que no pueden ser separados de sus madres, hubo guarderías instaladas dentro de los centros de detención.

Aunque en la mayoría de los casos el gobierno permitió que los observadores independientes de instituciones de defensa de los derechos humanos visitaran las cárceles, a veces las autoridades no permitieron que los observadores visitaran a los presos. La DNRS declaró que todos los funcionarios y representantes adecuadamente identificados de las ONG pudieron visitar a los presos; no obstante, con frecuencia los observadores y las autoridades no pudieron encontrar a los reclusos debido a registros

mal llevados y a la corrupción de los funcionarios de prisiones. Los reclusos tuvieron la libertad de practicar su religión, aunque no siempre se permitió que los representantes religiosos visitaran a los reclusos. Según un informe de *Prisoners Abroad*, tres días a la semana a los reclusos se les permitió visitas que duraban todo el día y en las prisiones de hombres, las mujeres podían pernoctar allí pasando un sábado.

Los reclusos informaron que fue prácticamente imposible quejarse por las condiciones al personal carcelario por temor a represalias y porque creían que sus pedidos serían desatendidos. Según se informó, las autoridades no investigaron las acusaciones por condiciones inhumanas. No hubo un defensor de reclusos. Sin embargo, los reclusos tuvieron derecho a apelar al defensor de derechos humanos local y nacional, si bien en la práctica, la limitación de recursos de estas entidades afecta su eficacia y eficiencia.

No se registraron avances en la promesa hecha por el gobierno en 2010 de asignar 40 millones de dólares (el dólar es la moneda oficial) a construir nuevos centros penitenciarios.

d. Arresto o detención arbitrarios

Si bien la Constitución prohíbe el arresto o la detención arbitrarios, la ley y algunos reglamentos adoptados por las autoridades centrales o provinciales socavan las garantías y la protección ofrecidas.

Función de la policía y del aparato de seguridad

La Policía Nacional está subordinada a la autoridad del Ministerio del Interior y, en la ley y en la práctica, es la entidad responsable de la seguridad interna y del orden público. La eficacia de la Policía Nacional se vio perjudicada por la corrupción, la deficiencia en los procedimientos de contratación y la falta de instrucción, supervisión y recursos. En enero, *Human Rights Watch* informó que en los casos de abusos policiales que incluyen ejecuciones extrajudiciales, “la impunidad ha sido la regla”. Una oficina de asuntos internos de la policía investiga denuncias de agentes de policía y puede remitir casos a los tribunales. Las autoridades civiles mantuvieron un control eficaz de la policía y de las fuerzas armadas.

Como consecuencia de la situación crítica de la delincuencia, el presidente delegó algunas responsabilidades de seguridad interna a las fuerzas armadas.

A pedido de la Policía Nacional, las ONG impartieron capacitación en materia de derechos humanos a los agentes de policía. Más de 10.000 efectivos de la policía recibieron capacitación en cursos mensuales. El gobierno continuó mejorando el nivel de preparación de la policía, lo que incluyó aumento de fondos, sueldos y adquisición de equipos.

En los casos de violencia colectiva, la policía a veces no intervino o no acudió de manera oportuna (véase la sección 6, violencia social).

Tras una protesta de la Policía Nacional en septiembre de 2010, la Fiscalía General del Estado inició varias investigaciones por amenazas a la seguridad interna, asesinato, rebelión, sabotaje e intento de asesinato al presidente. Aproximadamente 40 policías recibieron una sentencia por cargos emanados de su participación en la protesta y al término del año, las investigaciones y los juicios seguían en

curso. La Policía Nacional también llevó a cabo investigaciones internas resultantes en sanciones administrativas para la policía que desobedeció las órdenes.

Procedimientos de arresto y trato durante la detención

La ley exige que las autoridades expidan órdenes de arresto por escrito antes de la detención y que un juez impute los cargos al sospechoso por un determinado delito penal durante las 24 horas siguientes a su arresto. En general, las autoridades respetaron ese plazo, si bien en algunas provincias la detención inmediata tendió a ser considerablemente más prolongada. Los acusados tuvieron derecho a que se les informaran los cargos que pesaban en su contra. Si el informe de la investigación inicial es perjudicial, el juez, a pedido de la fiscalía, puede ordenar la prisión preventiva.

Los detenidos pueden cuestionar la legalidad de su detención presentando un pedido de hábeas corpus (sin plazo perentorio) a cualquier juez de la localidad en la que se haya producido la detención. Además, el detenido puede solicitar quedar libre bajo fianza o que se aplique otra medida alternativa dentro del período de detención previo al juicio. Estas medidas alternativas (por ejemplo, arresto domiciliario o libertad vigilada) se permiten únicamente en el caso de delitos punibles con una pena de cárcel inferior a cinco años.

Las autoridades responsables de decidir la validez de las detenciones a menudo permitían la elevación de acusaciones carentes de fundamento, ya sea por sobrecarga de trabajo o porque el acusador los sobornaba. A menudo se usó el sistema como medio de acoso en casos civiles, en que una parte procuraba que se arrestara a la otra con acusaciones penales.

Según la Constitución, los detenidos tienen derecho a un abogado o a solicitar un abogado defensor de oficio. La Defensoría Pública, órgano autónomo brindó servicios jurídicos a los acusados. Grupos de la sociedad civil, colegios de abogados, universidades (algunos contratados por la Defensoría Pública Penal) continuaron apoyando a grupos vulnerables carentes de acceso a los servicios de defensa jurídica.

Aunque la ley prohíbe un régimen de incomunicación durante las detenciones, las organizaciones de defensa de los derechos humanos siguieron denunciando violaciones esporádicas. Si bien la ley concede a los detenidos el derecho de acceso inmediato a abogados y familiares, hubo demoras según las circunstancias y la disposición de los funcionarios para aplicar la ley. Los presuntos narcotraficantes a menudo esperaron de 24 a 48 horas a que se realizaran esas visitas. Los detenidos que tenían suficientes recursos sobornaron a las autoridades carcelarias para que les facilitaran el acceso. La CEDHU informó que un número no preciso de reclusos en fase de investigación preliminar estuvo detenido en instalaciones de la Policía Judicial donde no se permitían las visitas de familiares ni de abogados.

Arresto arbitrario: La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos informó sobre varias denuncias de detención arbitraria. Sin embargo, la mayoría de las víctimas no deseó formalizarlas en causas jurídicas. Muchas víctimas se inclinaron por esta opción por temor a represalias, falta de recursos o poca esperanza de tener un juicio imparcial como consecuencia de la corrupción judicial y policial.

Prisión preventiva: La fiscalía calculó que el 44 por ciento de los prisioneros aún no había recibido sentencia. Las dilaciones se debían a procedimientos jurídicos prolongados y complicados, corrupción y capacitación deficiente de policías, fiscales, defensores públicos y jueces y a la ineficiencia en general del sistema de justicia. Muchos casos quedaron abandonados porque las víctimas no insistieron en la ejecutoriedad de la sentencia, en parte por el costo de los honorarios de abogados y los sobornos a las autoridades judiciales correspondientes.

e. Denegación de juicio público imparcial

Si bien la Constitución estipula que el poder judicial es independiente, en la práctica el poder judicial fue vulnerable a presiones externas y a corrupción. La prensa informó sobre la vulnerabilidad del sistema judicial a los sobornos, a cambiar fallos favorables y a una resolución más pronta de las causas judiciales. Ocasionalmente, los jueces adoptaron decisiones por influencia de los medios de comunicación o por presiones políticas y económicas.

El 13 de mayo, el Ministro del Interior José Serrano amenazó con presentar cargos penales a un juez por corrupción e imparcialidad. Las acusaciones de Serrano se desprendieron del fallo de un juez a favor de César Carrión, acusado de intentar asesinar al presidente durante una protesta de la policía en septiembre de 2010.

En algunos casos, las resoluciones de los juicios parecían determinadas de antemano y hubo alegaciones verosímiles de los acusados y la prensa de que los veredictos que daban los jueces no habían sido redactados por ellos mismos. En el juicio por difamación presentado por el Presidente Correa al periódico El Universo (véase la sección 2.a), el juez que presidía el tribunal publicó un fallo de 156 páginas 25 horas después de la audiencia. En casos similares, los fallos demoran un mínimo de dos semanas (y con frecuencia, mucho más). Los acusados alegaron que el fallo no había sido redactado por el juez que presidía el tribunal sino más bien copiado en la computadora del juez usando una memoria externa. Los acusados denunciaron al juez, caso que al término del año continuaba en investigación en la fiscalía de Guayas.

Procedimientos judiciales

A pesar del empeño puesto en modernizar el régimen judicial, el poder judicial siguió funcionando con lentitud e incongruencia. Hubo prolongadas demoras antes de que la mayoría de los casos llegara a juicio. Según los informes, los jueces emitían fallos más rápida o lentamente por presiones políticas y, en algunos casos, por el pago de sobornos. Las deficiencias del sistema judicial contribuyeron a crear situaciones en las que algunas comunidades aplicaron la ley por cuenta propia, como en el caso de violencia colectiva contra presuntos delincuentes.

Los acusados gozan de la presunción de la inocencia hasta que se los halle culpables en juicio. El sistema de justicia carece de jurados. Todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio público, a consultar con abogado, o a que se le nombre uno y a apelar. Los acusados pueden presentar pruebas, negarse a declarar en su contra y confrontar y contrainterrogar a los testigos. Además, tienen derecho a tener acceso a las pruebas en poder de la policía o de la fiscalía. Sin embargo, en la práctica, este derecho no se ejerció de manera uniforme por el desconocimiento de muchos acusados de este derecho, por falta de preparación o de representación jurídica. En general, las autoridades no informaron este derecho a los acusados.

El sistema judicial ordinario juzgó a la mayoría de los acusados, aunque algunos grupos indígenas juzgaron a sus miembros independientemente por transgresiones de las reglas tribales. Aunque la ley y la Constitución reconocen el derecho de las comunidades indígenas a aplicar sus propios sistemas de justicia basados en sus tradiciones y costumbres, no especifican cómo habría de ejercerse este derecho. Este sistema paralelo dio lugar a dudas no solo sobre la jurisdicción y conformidad con el derecho a un juicio justo sino también la posibilidad de resultados incongruentes entre los sistemas.

Presos y detenidos políticos

No hubo informes de presos ni detenidos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Los juzgados civiles y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo general considerados independientes e imparciales, tramitan las demandas de indemnización por daños y perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos y demandas de cese de dichas violaciones. Sin embargo, casi no se presentaron demandas civiles de indemnización por daños y perjuicios por causa de injusticia por presuntos actos del Estado puesto que esas demandas llevaban mucho tiempo y eran difíciles de procesar, dado que a los jueces les llevaba hasta 10 años para dictar sentencia sobre cada caso.

f. Injerencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La Constitución y la ley prohíben esos actos y, por lo general, el gobierno respetó esas prohibiciones en la práctica.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. Libertad de expresión y de prensa

Situación de la libertad de expresión y de prensa

La Constitución estipula la libertad de expresión y de prensa, pero el gobierno ha restringido esos derechos en la práctica.

Libertad de expresión: En el año, el Presidente Correa y sus funcionarios continuaron con ataques legales y verbales a la prensa. Con frecuencia, el presidente indicó que la prensa era su “peor enemigo” e inició cada vez más juicios por difamación contra periodistas. Además, recomendó públicamente que funcionarios públicos y personas particulares entablaran demandas contra la prensa.

En general, las personas pudieron criticar al gobierno en los fueros público y privado sin represalias. Sin embargo, es ilegal amenazar o insultar al presidente o al poder ejecutivo y los infractores pueden recibir penas de seis meses a dos años de encarcelamiento o una multa de US\$16 a US\$77.

El 26 de febrero, la escolta presidencial detuvo brevemente a Marco Luis Sovenis por gritarle “fascista” al presidente. En su discurso semanal del 5 de marzo, el Presidente Correa afirmó: “Les guste o no, en este país es un delito gritarle ‘fascista’ al presidente... Vamos a presentar todos los cargos que corresponda”. Sin embargo, a Sovenis nunca se le presentaron cargos formales.

Libertad de prensa: La prensa independiente permaneció activa y expresó una amplia gama de opiniones, algunas de ellas críticas del gobierno. El gobierno poseía al menos 19 estaciones y usaba su amplia publicidad para incidir en el debate público. Además, leyes nuevas limitaron la cantidad de empresas de medios que se podía tener.

Violencia y acoso: La ley hace obligatoria la transmisión gratuita de mensajes e informes del presidente y de su gabinete. El gobierno exigió regularmente a las estaciones de los medios de comunicación que transmitieran las declaraciones del presidente y otros dirigentes, lo cual redujo la programación pagada de las estaciones. El Presidente Correa con frecuencia se valió de estas transmisiones y de sus actos públicos para atacar a periodistas específicos, así como para criticar a la prensa, poner en tela de juicio su competencia y profesionalismo y acusarla de parcialidad. Varios periodistas e individuos que forman parte de las asociaciones de prensa locales denunciaron que los “sistemáticos” ataques verbales de Correa a los medios creaban “un ambiente hostil para los periodistas”.

En el año, Fundamedios, ONG dedicada a la libertad de prensa, informó de 156 casos de acoso (amenazas, ataques o arrestos) a periodistas u otros representantes de la prensa.

El 23 de octubre, al periodista Wilson Cabrera Riera se le negó el permiso para salir del país por un orden de arraigo que tenía pendiente. Cabrera adujo que la orden era infundada y que se había emitido en una región del país a la que nunca había ido. Cabrera intentaba viajar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para participar en una audiencia sobre la libertad de prensa en el país.

El 9 de noviembre, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, señaló en una entrevista que había recibido amenazas de muerte tras el testimonio que dio el 25 de octubre ante la CIDH sobre la situación de la libertad de prensa en el país.

Censura o limitaciones al contenido: La relación entre la prensa y el gobierno fue mala y los periodistas que trabajan en medios privados denunciaron casos de censura indirecta y afirmaron que los ataques del Presidente Correa los llevaba a la autocensura.

Los medios privados denunciaron que el gobierno con frecuencia recurría a inspecciones tributarias y laborales para hostigar a las empresas que publican informes con críticas al gobierno. Estas investigaciones obligaban a las empresas a recurrir a una defensa legal larga y costosa.

El gobierno fue el mayor anunciante del país y utilizó los contratos de publicidad para recompensar o castigar a los medios. Los que criticaban al gobierno informaron no haber recibido publicidad del gobierno o que contratos cuantiosos fueron rescindidos.

Los periodistas alegaron que el trámite de renovación de la frecuencia de radiodifusión se convirtió en una evaluación política subjetiva de la estación en lugar de tratarse de una revisión técnica.

Leyes de difamación y la seguridad nacional: Con creciente frecuencia, el gobierno recurrió a mecanismos jurídicos en contra de las compañías de medios, de periodistas y de particulares, como por ejemplo las leyes de difamación. Fundamedios informó que desde 2006 hubo 26 demandas contra periodistas o compañías de medios y de ellas, seis se habían iniciado este año. La difamación está tipificada y la ley contempla penas de hasta tres años de cárcel y el pago de multas, daños y perjuicios.

La ley contempla cargos penales por difamación, que pueden emplearse para tipificar la opinión. Sin embargo, no quedó claro el alcance de la ley, incluso si rige o no para artículos de opinión y si sobre los dueños de las compañías de medios recae la responsabilidad civil de las afirmaciones hechas por periodistas u otros que usan las plataformas de sus medios, y quedó bajo la lupa en los casos de El Universo y Hoy.

El 22 de marzo, el Presidente Correa presentó cargos por difamación contra el periódico El Universo, a sus directivos Carlos, César y Nicolás Pérez y al ex jefe de opinión Emilio Palacio por una columna publicada el 6 de febrero. El 20 de julio, un juez halló a los cuatro acusados culpables de difamación y los sentenció a tres años de cárcel y a un pago combinado de 30 millones de dólares por daños y perjuicios. Al periódico se le imputó un adicional de 10 millones de dólares por daños y perjuicios. A fines de agosto, Palacio huyó del país, presuntamente porque temía por su integridad personal. En septiembre, el tribunal provincial de Guayas ratificó el veredicto inicial tras la apelación de los acusados. Los acusados presentaron un segundo recurso ante la Corte Nacional de Justicia. El 28 de diciembre, la CNJ ratificó la condena de Palacio. Al término del año, seguía pendiente una audiencia para la apelación que presentaron por su cuenta El Universo y sus directivos.

El 21 de diciembre, el juzgado penal de Pichincha sentenció al directivo del periódico Hoy, Jaime Mantilla Anderson, a tres meses de cárcel y le impuso una multa de 25 dólares por un juicio por difamación que presentó el entonces presidente del Banco Central Pedro Delgado Campana. Según informes de prensa, la causa se radicó en 2009 y se alegaba que varios artículos publicados por el periódico habían dañado la reputación de Delgado. Mantilla fue sentenciado tras rehusarse a divulgar los nombres del periodista o de las fuentes. Después del fallo, Delgado informó a la prensa que retiraría los cargos pero al término del año, aún no había presentado la solicitud formal para hacerlo. Mantilla apeló la sentencia.

Libertad de Internet

No hubo restricciones del gobierno al acceso a Internet ni hubo informes verosímiles de que el gobierno monitoreara los mensajes enviados por correo electrónico ni las salas de chat en Internet. Las personas y los grupos pudieron expresar opiniones por Internet, incluso por correo electrónico.

Libertad académica y acontecimientos culturales

No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica ni los eventos culturales.

b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

Libertad de reunión

La ley contempla la libertad de asociación pacífica. En general, el gobierno respetó este derecho en la práctica, aunque no sin excepciones. Las manifestaciones públicas requirieron permisos gubernamentales previos, que en general fueron otorgados, salvo algunas excepciones. El gobierno tendió a desplegar una gran presencia de seguridad en las manifestaciones. En general, las fuerzas de seguridad respetaron los derechos de los participantes, aunque hubo algunas excepciones.

Cada vez con mayor frecuencia, el gobierno presentó cargos legales o inició investigaciones a manifestantes que obstaculizaban vías o interferían con la prestación de servicios públicos, acusándolos de “terrorismo y sabotaje” o cargos semejantes que en la práctica tipificaban las protestas. Algunas ONG calcularon que entre 100 y 200 personas recibieron cargos penales por participar en protestas.

El 8 de agosto, los dirigentes indígenas Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efrén Arpi fueron sentenciados a ocho días de cárcel por obstaculizar ilegalmente vías e interferir en la prestación de servicios públicos durante una protesta de abril de 2010.

El 25 de octubre, el dirigente indígena Marco Guatemal fue arrestado por los delitos menores de obstrucción ilegal de vías durante una protesta de abril de 2010. En un comienzo se acusó a Guatemal de terrorismo, cargos que posteriormente fueron reducidos. Un juez desechó el proceso el 10 de noviembre por falta de pruebas después de que Guatemal pasara 17 días en prisión preventiva.

En septiembre de 2010, los dirigentes indígenas Pepe Acacho, Fidel Kaniras y Pedro Mashiant Chamik fueron acusados de terrorismo y sabotaje presuntamente por incitar una protesta indígena que llevó a la muerte de Bosco Wisuma en 2009. El 1 de febrero, se arrestó a los acusados y se los trasladó a una cárcel de Quito. El 8 de febrero, un juez falló que la detención había sido “ilegal y arbitraria” y dejó en libertad a los acusados, que habían estado cumpliendo con los términos de la libertad vigilada. Los acusados permanecieron en libertad vigilada y al término del año, la causa seguía pendiente.

Libertad de asociación

La ley establece la libertad de asociación y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica. Como resultado de un decreto de 2008, el gobierno continuó exigiendo que las organizaciones nacionales volvieran a inscribirse. El gobierno puso en práctica un nuevo reglamento para las ONG internacionales que también exigía la reinscripción.

La ley confiere al gobierno poderes discrecionales para disolver organizaciones (incluidas las sociedades civiles, fundaciones e iglesias) por diversos motivos, entre los que cabe citar el comprometer los intereses del Estado, no colocar los nombres de todos sus miembros en un sitio web público, o no brindar acceso a información solicitada por el gobierno. Las ONG expresaron preocupación de que el gobierno usara la información recogida para enjuiciar a determinadas ONG que apoyaban a grupos críticos del gobierno. Además, las ONG denunciaron hostigamiento con inspecciones tributarias y laborales.

c. Libertad de culto

Véase el *Informe sobre la libertad de culto internacional* que publica el Departamento de Estado en www.state.gov/j/drl/irf/rpt/.

d. Libertad de circulación, desplazados internos, protección de refugiados y apátridas

La ley establece la libertad de circulación dentro del país, así como para los viajes al extranjero y la emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respetó esos derechos en la práctica.

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con otras organizaciones humanitarias, tales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para dar protección y asistencia a los desplazados internos, refugiados, refugiados que retornan, personas que buscan asilo y otras personas de interés.

Protección de los refugiados

Acceso al asilo: La ley prevé la adjudicación de asilo o la condición de refugiado y el Estado ha establecido un sistema para conferir protección a los refugiados. Los solicitantes a quienes se les rechace el trámite de solicitud para obtener la condición de refugiado tienen derecho por ley a apelar. Una vez agotada la instancia de apelación, tienen 30 días para abandonar el país.

El 11 de enero, la Dirección General de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores agregó un paso en el trámite de solicitud de condición de refugiado a fin de determinar la admisibilidad de la solicitud de un posible refugiado. El nuevo y adicional paso consiste en una breve entrevista que realiza el personal de la Dirección General de Refugiados al solicitante, después de la cual la Dirección toma una decisión preliminar sobre la elegibilidad del solicitante. El solicitante puede recibir su condición oficial de persona que busca asilo únicamente después de determinarse la admisibilidad de la solicitud.

El trámite de inscripción por lo general duró más de un año, sobre todo fuera de Quito. Mientras se cursa trámite a la solicitud, el solicitante no tiene derecho a trabajar, lo cual deja a muchas personas que buscan asilo vulnerables ante la explotación laboral y al tráfico sexual.

Principio de no devolución: En el año, ACNUR notificó seis casos confirmados de devolución.

Abuso de refugiados: El gobierno informó que a noviembre había más de 55.000 refugiados reconocidos en el país, la gran mayoría de los cuales eran colombianos. Los refugiados fueron vulnerables a la delincuencia, a la violencia social y a la de género. Además, denunciaron discriminación laboral y de vivienda. Por los estereotipos sociales, se suele considerar a los refugiados como delincuentes y prostitutas. Este tipo de discriminación afectó la capacidad de los refugiados de asimilarse con la población local.

Acceso a los servicios básicos: La ley garantiza a los refugiados y a los que solicitan asilo el mismo acceso que tienen los ecuatorianos a los servicios de salud pública. La presentación de cualquier documento de identidad es suficiente para asegurar el acceso a las instituciones de educación pública. Sin embargo, numerosas ONG afirmaron que algunas autoridades escolares locales prohibían que los niños no ecuatorianos se inscribieran en las escuelas. Diversas ONG informaron que el Registro Civil no siempre cooperó con la inscripción de los niños refugiados o de los hijos de refugiados nacidos en el país, a pesar de los requisitos legales para hacerlo.

Soluciones perdurables: En el año, un número reducido de refugiados que se encontraba en el país se reasentó en otros países. Pocos refugiados pudieron naturalizarse como ciudadanos u obtener la condición de residente permanente por el costo y la duración del trámite legal.

Protección temporal: El gobierno también otorgó protección temporal a personas que quizás no pudieran clasificarse como refugiados y en el año esto abarcó a 13.000 personas. El gobierno y las ONG brindaron ayuda humanitaria y servicios adicionales, como asistencia legal, de salud, de educación y

psicológica, a los colombianos de los cuales se tiene constancia que hayan cruzado la frontera durante el año. Cuando se denegó la condición de refugiado oficial, se puso fin a la mayor parte de la asistencia.

Sección 3. Respeto de los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno

La ley confiere a los ciudadanos el derecho a cambiar pacíficamente su gobierno y, en la práctica, los ciudadanos ejercieron este derecho mediante elecciones periódicas, libres e imparciales sobre la base del sufragio universal.

Elecciones y participación política

Elecciones recientes: El 7 de mayo los ciudadanos votaron en un referéndum nacional sobre cambios constitucionales, incluida la reforma del sistema judicial y la propiedad y reglamentación de las instituciones financieras y de medios, así como cambios normativos en los ámbitos de juegos de azar, crueldad con animales y seguridad social. Un pequeño grupo de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró que el referéndum fue libre y justo pero hubo demoras e irregularidades en el escrutinio de los votos. Los observadores locales expresaron su inquietud por infracciones de las reglas que rigen los gastos de campaña.

Las elecciones para cargos públicos en todos los niveles del gobierno, la presidencia y la Asamblea Nacional se celebraron en 2009. Observadores de la OEA y de la UE concluyeron que, en general, las elecciones fueron libres y justas, con irregularidades a nivel local. Los observadores nacionales también observaron las elecciones en todo el país. Si bien los equipos de observadores internacionales y nacionales no informaron sobre ningún fraude importante, hubo algunos informes de votos faltantes o marcados, irregularidades en el conteo y cálculo de votos e incidentes de violencia.

Participación de la mujer y de las minorías: La Constitución contempla la representación equilibrada de los sexos en el sector público, promovida por el gobierno, como por ejemplo en las listas de candidatos de los partidos políticos a cargos en la Asamblea Nacional y en otras instituciones representativas. La ley exige que las listas electorales tengan una representación equilibrada de los sexos y que estén estructuradas de manera tal de intercalar nombres de hombres y mujeres (o viceversa), para los candidatos tanto principales como suplentes.

Había 42 mujeres en la Asamblea Nacional, que tienen 124 escaños, 11 mujeres en el gabinete de 28 miembros y dos secretarías de estado con el rango de ministras. Hubo siete afroecuatorianos e indígenas en la Asamblea Nacional, pero ningún ecuatoriano de origen asiático. En el gabinete no hubo afro ecuatorianos, ni ecuatorianos de origen asiático ni indígena.

Sección 4. Corrupción oficial y transparencia del gobierno

La ley dispone sanciones penales por corrupción oficial. Sin embargo, el gobierno no aplicó la ley eficazmente, y a veces los funcionarios incurrieron en prácticas corruptas con impunidad.

El gobierno reconoció una amplia corrupción en el poder judicial y comenzó el proceso de reforma del mismo. Académicos y analistas de grupos de reflexión dijeron que no se daba trámite a las causas jurídicas a menos que se sobornara a policías y funcionarios judiciales. Según informes de prensa, hubo corrupción en la policía y corrupción generalizada en las adquisiciones y los contratos públicos. En junio,

unos funcionarios públicos acusaron al Ministerio de Salud Pública de comprar hospitales móviles a un precio totalmente desproporcionado.

Dirigentes sindicales y dueños empresariales denunciaron corrupción entre inspectores (véase la sección 7.d.).

La Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión tiene a su cargo la investigación y la información de las denuncias públicas de corrupción y la promoción de prácticas transparentes en la administración pública. La Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción también es la instancia responsable de investigar casos de corrupción.

El 1 de febrero, la petrolera Chevron entabló una demanda en virtud de la Ley sobre organizaciones influidas por la extorsión y la corrupción (sigla RICO) a la demandante en un juicio ambiental por miles de millones de dólares que en su momento pesaba sobre la empresa en Ecuador. En la demanda se alegaba que la parte demandante, los abogados y las consultoras de la causa ambiental habían inventado pruebas y se habían asociado ilícitamente con jueces a fin de obtener un fallo favorable (véase la sección 6, pueblos indígenas).

El 9 de junio, el Juzgado Primero de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia anuló procesos penales en contra de dos abogados que representaban a Chevron y siete ex funcionarios del gobierno relacionados con imputaciones de fraude en un acuerdo de rectificación ambiental y finiquito entre Chevron y el gobierno.

El 22 de agosto y el 20 de septiembre, se celebraron audiencias en la causa de Juan Xavier Aguinaga, ex subsecretario de relaciones exteriores del Ministerio del Litoral, y otros notarios públicos, por su presunta participación en la naturalización ilegal de ciudadanos cubanos. El caso continuó al finalizar el año.

A los funcionarios públicos se les exige que declaren sus participaciones financieras al asumir sus cargos y en caso de una investigación, y todos los organismos deben revelar información salarial anualmente.

La Constitución estipula que todas las personas tienen derecho a acceder a la información referente a las organizaciones públicas o privadas que reciban fondos estatales. La ley exige que todas las organizaciones (públicas o privadas) que reciban fondos públicos respondan a las peticiones de información por escrito, publiquen en Internet información específica y presenten un informe anual a la Defensoría del Pueblo donde se detalle su cumplimiento de la ley de transparencia. Como resultado de ello, las dependencias gubernamentales cada vez más publican en Internet información sobre el presupuesto, las funciones, la información organizativa, las listas de funcionarios públicos y todos los avisos oficiales, además de responder a las peticiones por escrito. Sin embargo, en la práctica no siempre se dio respuesta a las solicitudes de información y el gobierno hizo excepciones aduciendo que la información solicitada no estaba disponible. Los jueces no obligaron el cumplimiento de las leyes que exigen la divulgación de información por parte del gobierno.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de derechos humanos

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos actuaron en general sin restricciones gubernamentales, investigando y publicando sus resultados en casos de derechos humanos. Los funcionarios públicos cooperaron con los grupos, pero a menudo se abstuvieron de obrar conforme a sus recomendaciones.

El gobierno comenzó a normalizar los requisitos para la inscripción y el funcionamiento en el país de las ONG internacionales, incluidos los grupos dedicados a temas de derechos humanos. En virtud del nuevo reglamento, las ONG internacionales tenían la obligación de volver a inscribirse ante el gobierno. Al principio, algunas ONG expresaron la preocupación de que se emplearía el trámite para clausurar a las ONG que presuntamente estaban en contra del gobierno, pero hasta la fecha, ninguna ONG ha denunciado sanciones con motivación política como consecuencia del nuevo reglamento.

El gobierno hizo declaraciones públicas en las que criticaba y atacaba la credibilidad de algunas ONG locales e internacionales, así como la de sus hallazgos. Los funcionarios del gobierno, incluido el presidente, rechazaron públicamente hallazgos publicados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y por el relator especial de libertad de expresión de la CIDH. Además, el gobierno se rehusó a reunirse con la SIP. El 25 de junio, el Presidente Correa afirmó que algunas ONG socavaban la seguridad nacional.

Órganos estatales de derechos humanos: La Constitución describe la Defensoría del Pueblo como parte independiente del poder judicial, tanto administrativa como financieramente, que depende de la Función de Transparencia y Control Social y está abocada a problemas de derechos humanos. Al mes de diciembre, la dependencia contaba con 75 abogados y presentaba casos a la fiscalía con regularidad. La percepción que tenía el público de la Defensoría era que era independiente pero que su eficacia se veía limitada por la falta de recursos y personal.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La Constitución prohíbe la discriminación por raza, género, discapacidad, idioma o condición social. No obstante, el Gobierno no aplicó plenamente esta prohibición. Las mujeres, las personas con discapacidad, los indígenas, los afroecuatorianos y la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGTB) sufrieron discriminación de manera constante.

Mujeres

Violación y violencia doméstica: Aunque la ley prohíbe la violencia contra la mujer, incluso en el matrimonio, hubo abusos generalizados. En marzo de 2010, la Defensoría del Pueblo publicó un informe en que declaraba que por año unas 83.000 mujeres eran víctimas de algún tipo de violencia o maltrato. El informe también señaló que mensualmente, 7.000 mujeres eran atacadas y que a diario más de 200 mujeres eran víctimas de algún tipo de violencia. Según la campaña lanzada por el gobierno para poner fin a la violencia contra la mujer, “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, en algún momento de la vida ocho de cada 10 mujeres son víctima de violencia física, psicológica o sexual.

La ley tipifica la violación y establece penas máximas de 25 años de encarcelamiento. Según el derecho de familia, la violación conyugal se considera un tipo de violencia y puede ser encausada en virtud del código penal. La pena por violación que cause la muerte es de 12 a 15 años de cárcel. Entre enero y junio, la fiscalía recibió 5.036 denuncias de delitos sexuales. La Policía Nacional detuvo a 1.285 personas

acusadas de violación y presentó 552 denuncias. Entre enero y octubre, la fiscalía condenó a 346 personas por violación. No se denunciaron muchos casos de violación y agresión sexual porque la víctima se negaba a enfrentarse con el perpetrador por temor a represalias, más violencia o estigmatización.

Las violaciones más generalizadas de los derechos de la mujer tienen que ver con la violencia doméstica y la sexual. Si bien la ley lo prohíbe, ambas fueron generalizadas y no se denunciaron plenamente, nuevamente por temor a represalias, más violencia o estigmatización. Aunque muchas mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abuso doméstico o delitos sexuales fueron remitidas al sistema judicial por las autoridades, los prejuicios culturales, la dependencia financiera o la falta de recursos financieros, la presión familiar y el temor de la víctima a prestar declaración en juicio contribuyeron a que se retiraran las acusaciones contra los agresores. Entre enero y junio, se presentaron 2.437 denuncias de violencia doméstica.

En abril de 2010, el gobierno inició una campaña contra el sexismo llamada “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, que procuraba erradicar la violencia de género mejorando el sistema de justicia, protegiendo a las víctimas de violencia y concientizando el hecho de que la violencia contra la mujer debe enmarcarse como una violación de los derechos humanos. Un estudio publicado por la campaña indicó que en 2009 aproximadamente el 64 por ciento de las muertes de mujeres se debieron a la violencia de género. La segunda fase de la campaña comenzó en julio de 2010 y se centró en las consecuencias que sufren los niños y adolescentes como resultado de la violencia doméstica.

El gobierno estableció nuevos centros conjuntos de servicios públicos para proporcionar a las víctimas de violencia doméstica y de género asistencia gratuita sobre cuestiones legales, asistencia social y médica y protección policial. Conforme al derecho de familia, se prevén multas por “daño, dolor y sufrimiento” que oscilan entre US\$264 y US\$3.960, según la gravedad del delito. La ley también confiere a los tribunales de familia la facultad de expulsar del hogar a un cónyuge maltratador si la convivencia permanente acarrea un riesgo para la víctima del maltrato.

Acoso sexual: A pesar de la prohibición legal de acoso sexual, varias organizaciones de defensa de los derechos de la mujer declararon que el acoso es común en el lugar de trabajo. Entre enero y junio de 2010, la policía nacional recibió 325 informes y denuncias de acoso sexual.

Derechos reproductivos: La ley reconoce el derecho básico de las parejas y las personas a tomar decisiones libremente y con responsabilidad en cuanto a la cantidad de hijos y el momento y espaciado de los nacimientos. La ley protege los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y exige atención prenatal gratuita, servicios de planificación familiar y pruebas de detección de cáncer. Según el Fondo de las Naciones Unidas de Población (FNUAP), el 99 por ciento de las mujeres contó con parteras capacitadas durante el parto en 2009. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública declaró que sólo el 62 por ciento de nacimientos de madres auto identificadas como indígenas tuvieron lugar en hospitales o centros de salud. Según el FNUAP, la tasa de mortalidad materna a nivel nacional fue de 140 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. La mayoría de las muertes durante el embarazo o el parto se debieron a complicaciones obstétricas, presión alta, eclampsia, infecciones u otras anomalías en el trabajo de parto. Asimismo, el acceso limitado a atención materna para madres que residían en zonas rurales o remotas contribuyó a la elevada tasa de mortalidad materna.

La encuesta de salud materna infantil reveló que el uso de anticonceptivos era del 39 por ciento en las mujeres y del 59 por ciento en las casadas. La Oficina de Referencias Demográficas informó que en 2009

más del 36 por ciento de las usuarias de métodos anticonceptivos modernos recibieron estos servicios por medio de los programas patrocinados por el gobierno. Sin embargo, la Dirección Nacional de Normatización exigió un certificado especial para la importación de anticonceptivos, lo cual a veces se tradujo en escasez y aumentos de precio.

Discriminación: La Constitución brinda a las mujeres una gama de beneficios económicos, políticos y sociales. La ley estipula que el gobierno debe formular e implementar políticas para lograr igualdad de género, con hincapié en una mayor participación de la mujer en los planes y programas y en proporcionar asistencia técnica para aplicar la ley en el sector público.

Si bien las mujeres gozaron de la misma condición legal que los hombres, en la práctica las mujeres frecuentemente no tuvieron los mismos derechos. Se observó una discriminación social generalizada de la mujer, particularmente en el ámbito de oportunidades educativas y económicas para las de edad avanzada y las pertenecientes a las clases económicas más bajas. En promedio, las mujeres ganaron un 39 por ciento menos que los hombres en trabajos similares. La tendencia fue a que trabajaran en el sector informal o como empleadas domésticas, lo cual les otorgaba menos estabilidad y sueldos más bajos. Hubo menos mujeres que hombres empleadas en trabajos profesionales y tareas especializadas. Los defensores de las mujeres alegaron que la cultura y la tradición impedían que ellas lograran la igualdad plena. Las mujeres indígenas sufrieron una triple discriminación por género, etnia y menor condición económica.

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: La ciudadanía se obtiene mediante el nacimiento en el país, por nacimiento de una madre o un padre ecuatoriano en el extranjero o por naturalización. La Dirección General de Registro Civil, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Instituto de la Niñez y la Familia promovieron la campaña “Al Ecuador ponle tu nombre”, que facilitó la inscripción de aproximadamente 60.000 niños en todo el país en el año. En 2009, según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, había 300.000 niños no inscritos en el país. UNICEF calculó que en el año, en el país no se había inscrito al 15 por ciento de los niños menores de cinco años.

Si bien la ley prohíbe que las escuelas exijan la presentación de documentos del registro civil para inscribir a los niños, algunas (mayormente las públicas) continuaron exigiéndolos. Para otros servicios públicos, como los subsidios de asistencia social y la atención primaria de salud gratuita, se necesitaba algún tipo de identificación.

Educación: Según la Constitución, la educación es obligatoria hasta el noveno grado y gratuita hasta el doceavo. Sin embargo, los costos afines, como de uniformes y libros, y la falta de espacio en las escuelas públicas impidieron que muchos adolescentes asistieran a la escuela. En algunas provincias, las escuelas públicas rechazaron el ingreso de alumnos por falta de espacio.

Abuso infantil: Según el gobierno, en 2009, el 21 por ciento de los menores habían sido víctima de alguna forma de abuso sexual. Algunos proyectos patrocinados por ONG locales informaron que los niños de la calle, muchos de los cuales pertenecían a familias indígenas pobres, sufrían explotación.

Explotación sexual de menores: La ley prohíbe la pornografía infantil, con sanciones de seis a 16 años de cárcel. La edad para el consentimiento es de 14 años y la pena oscila entre los 16 y los 25 años de

cárcel. La explotación sexual comercial de menores seguía siendo un problema. Si bien la prostitución de adultos era legal, los dueños de prostíbulos no verificaban la edad de sus empleados. Por ende, algunos menores trabajaban en prostitución.

Sustracción internacional de menores: El país es signatario del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Para obtener la información sobre el informe de cumplimiento que emite el Departamento de Estado, sírvase consultar http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html.

Antisemitismo

No hubo informes de actos antisemitas. La comunidad judía era pequeña, calculada en 250 familias en Quito, según la sinagoga local.

Trata de personas

Véase el informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas en www.state.gov/j/tip.

Personas con discapacidad

La Constitución prohíbe la discriminación de personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales y les confiere prioridad y atención especializada en los sectores público y privado. El Consejo Nacional de Discapacidades, organismo interinstitucional, supervisa las políticas gubernamentales referentes a las personas con discapacidades. A pesar de que la ley hace obligatorio el acceso a edificios y promueve el acceso igualitario a salud educación, seguridad social, empleo, transporte y comunicaciones a las personas con discapacidad, el gobierno no lo hizo cumplir plenamente. La ley exige que se contrate a un 4 por ciento de personas con discapacidad en todas las empresas públicas y privadas que tengan más de 25 empleados. Según la información del gobierno, sólo un 35 por ciento de las 1.532 empresas auditadas cumplía con esta ley.

Una iniciativa denominada “Ecuador sin barreras”, encabezada por el vicepresidente, tuvo por objeto crear un número no precisado de empleos para las personas con discapacidad, proporcionó fondos a más de 200 municipios para mejorar el acceso a los edificios públicos e inauguró centros de capacitación y rehabilitación. La iniciativa también fiscalizó el nivel de cumplimiento de las empresas que contratan a personas con discapacidad. Además de este programa, el gobierno estaba construyendo centros para los considerados intelectualmente discapacitados. Los individuos a cargo de la atención de personas con discapacidad grave recibieron un subsidio mensual del gobierno de \$240.

La ley dispone que las autoridades electorales brinden acceso y faciliten el sufragio a las personas con discapacidad y los observadores internacionales elogiaron las labores del gobierno para dar cabida a las personas con discapacidad en el referéndum nacional del 7 de mayo.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

Los ciudadanos afro ecuatorianos, que según el censo de 2010 constituyen cerca del 7 por ciento de la población, fueron víctima de discriminación generalizada, en particular en lo referente a oportunidades educativas y económicas. La Constitución declara que el estado es plurinacional y afirma el principio de

la no discriminación al reconocer los derechos de las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias (población agrícola y rural reconocida como un grupo étnico independiente). También estipula políticas de acción positiva que aseguren la representación de las minorías. Un decreto ejecutivo de 2009 exige a todos los organismos del sector público que garanticen que el “acceso al trabajo” refleje el porcentaje de poblaciones indígenas, afro ecuatorianas y montubias.

Las organizaciones afro ecuatorianas señalaron que a pesar de la ausencia de discriminación oficial, la discriminación social, incluidos los estereotipos, siguió afectando a ese grupo y generó obstáculos en el empleo, la educación y la vivienda. Por ejemplo, los afro ecuatorianos continuaron afirmando que la policía los paraba para verificar sus documentos con más frecuencia que a otros ciudadanos y que los empleadores a menudo se abstendían de entrevistar a personas cuya solicitud de empleo llevaba fotografías de afro ecuatorianos.

La Corporación de Desarrollo Afro ecuatoriano (CODAE) señaló que los afro ecuatorianos todavía carecían de acceso a la educación básica y que la tasa de inscripción en escuelas de niños afro ecuatorianos era inferior al promedio nacional.

Pueblos indígenas

Según el censo de 2010, el 7 por ciento de la población se auto-identificaba como indígena. Las organizaciones indígenas calcularon que hasta un 30 por ciento de la población mantenía su identidad cultural indígena y vivía en comunidades indígenas. La gran mayoría de los ciudadanos indígenas residía en zonas rurales, incluso en la sierra y las provincias de la Amazonia. Los indígenas continuaron sufriendo los efectos de la discriminación en muchos niveles de la sociedad y, salvo contadas excepciones, se encontraban en el estrato socioeconómico más bajo.

La ley reconoce los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad comunitaria. En muchos casos, la comunidad indígena cuenta con el título de propiedad de las tierras. En otros casos, los grupos indígenas administraron una reserva que el gobierno separó para proteger la diversidad biológica. El gobierno colaboró con las comunidades indígenas para ayudarles en la obtención de títulos de propiedad para sus tierras.

La Constitución otorga a los pueblos indígenas el derecho de ser consultados y de participar en las decisiones relativas a la explotación de recursos no renovables ubicados en sus tierras y que podrían afectar su cultura o medio ambiental. Grupos indígenas reclamaron que las leyes recién aprobadas o los proyectos de ley que abarcaban la minería, recursos hídricos y recursos de hidrocarburos no tomaban suficientemente en cuenta los puntos de vista indígenas y además violaban la autonomía indígena sobre sus tierras y recursos. Si bien un fallo de abril de 2010 de la Corte Constitucional exige que la Asamblea Nacional consulte con las comunidades afectadas en cuestiones hídricas antes de que la legislatura pueda someter a votación los proyectos de ley, no existió un mecanismo de consulta.

La Constitución permite que los pueblos indígenas participen de los beneficios que puedan conllevar los proyectos de extracción de recursos naturales y que reciban compensación por cualquier daño que dichos proyectos ocasionen. En caso de daño ambiental, la ley exige acciones gubernamentales correctivas inmediatas y la indemnización total por parte de la empresa responsable. Sin embargo, algunas organizaciones indígenas alegaron que no se les consultaba ni tampoco había acciones correctivas.

Algunos grupos indígenas presionaron al gobierno y organizaron protestas para intentar obtener una mayor parte de los ingresos provenientes del petróleo y mayor participación en la toma de decisiones referentes al uso de recursos naturales y al desarrollo. A algunos dirigentes indígenas se les imputaron cargos penales por participar en las protestas sociales (véase la sección 2.b).

Aunque los pueblos indígenas tienen los mismos derechos civiles y políticos que los demás ciudadanos, algunos dirigentes denunciaron actos de discriminación y persecución, como discriminación en el acceso a educación superior y a empleo. La Constitución consolida los derechos de los pueblos indígenas; declara que el país es plurinacional, reconoce el quechua y el shuar como “idiomas oficiales de relación intercultural” y reconoce específicamente la justicia indígena. Sin embargo, la falta de una relación claramente definida entre la justicia indígena y el sistema ordinario de justicia redundó en conflictos legales entre el gobierno y los dirigentes indígenas.

Otro problema grave fue el daño ambiental generalizado, debido en parte a la deforestación y a la producción de petróleo. Los colonos, entre los cuales cabe citar a algunos pertenecientes a otros grupos indígenas, los narcotraficantes y las madereras invadieron ilegalmente los territorios indígenas. Las autoridades locales corruptas, la falta de voluntad política y las divisiones entre varias comunidades indígenas y dentro de ellas socavaron los esfuerzos de esas comunidades para poner fin al tráfico de madera talada ilegalmente. La minería en pequeña escala, a menudo por parte de las mismas comunidades indígenas, también contribuyó al grave daño ambiental.

El 14 de febrero, el Tribunal Provincial de Sucumbíos falló en contra de Chevron en una causa ambiental de larga data entablada por una serie de comunidades indígenas. El tribunal ordenó que la empresa pagara el laudo de US\$9.500 millones, que posteriormente ascendió a más de US\$18.000 millones. Ambas partes apelaron el fallo. La demandante, que representaba a unos 30.000 indígenas, alegaba que su salud, bienestar y medio de subsistencia se habían visto afectados por el daño ambiental causado por Texaco (posteriormente comprada por Chevron).

Abusos sociales, discriminación y actos de violencia motivados por la orientación sexual y la identidad de género

La Constitución incluye el principio de la no discriminación y establece el derecho de elegir la orientación sexual. A pesar de que la ley prohíbe la discriminación por orientación sexual, los grupos de gays, lesbianas, transexuales y personas transgénero continuaron sufriendo discriminación por parte de varios órganos públicos y privados. Las organizaciones LGBT informaron que las personas transgénero sufrían más discriminación dada su mayor visibilidad. Los grupos LGBT declararon que la policía y los fiscales no investigaban a fondo la muerte de las personas de los grupos LGBT, ni siquiera cuando se sospechaba que el homicidio había sido motivado por la orientación sexual o la identidad de género.

Las organizaciones LGBT y fuentes de prensa fidedignas informaron que se internaba a las personas LGBT en contra de su voluntad en centros de tratamiento privados para “curarlas” o “deshomosexualizarlas”, a pesar de que este tratamiento es ilegal. Según se informó, en las clínicas se empleaban tratamientos crueles, incluida la violación, en un intento por cambiar la orientación sexual de las personas LGBT. En agosto, el gobierno informó que había clausurado 30 de estos centros, pero las organizaciones LGBT señalaron que había otros que continuaban funcionando.

Los miembros de la comunidad LGBT continuaron denunciando que con frecuencia no se respetaba su derecho a la igualdad de acceso a la instrucción formal. La población LGBT implicada en el comercio sexual denunció situaciones de abuso, extorsión y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad.

Otras formas de violencia o de discriminación sociales

La Constitución prohíbe específicamente la discriminación de las personas con VIH/SIDA. No hubo discriminación oficial de las personas con VIH/SIDA. Sin embargo, algunas ONG informaron que las personas con VIH/SIDA creían ser discriminadas, incluso en cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades de empleo y al acceso a la atención de salud apropiada.

La justicia de fuerzas parapoliciales continuó siendo un problema. La violencia de ese tipo ocurrió en particular en las comunidades indígenas y los vecindarios pobres de las ciudades principales con escasa presencia policial. El 1 de agosto, un grupo denominado de protección comunitaria en la provincia del Azuay atacó a José Belisario R, tras acusarlo de robar ganado. Golpearon a José y le prendieron fuego. Después de que intervino la policía, una ambulancia transportó a José al hospital para que lo trataran.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y derecho a la negociación de convenios colectivos de trabajo

La ley confiere a la mayoría de los trabajadores del sector privado derecho a constituir e integrar los sindicatos que deseen, realizar huelgas legales y negociar colectivamente. La Constitución considera “irrevocables” los derechos de los trabajadores, contempla el derecho a sindicarse y a declararse en huelga (excepto en los sectores estratégicos) y compromete el apoyo estatal a los sindicatos democráticos. Los efectivos de la policía, las fuerzas armadas y la mayoría de los empleados del sector público (los afectados por la ley de la administración pública) carecían de libertad para formar sindicatos. En su mayoría, los funcionarios públicos mantuvieron su afiliación a una asociación del sector laboral, pero no se permite que dichas asociaciones hagan huelga ni participen en negociaciones colectivas. La ley exige que a los trabajadores de las empresas estatales los represente un único sindicato.

La ley exige un mínimo de 30 trabajadores para formar asociaciones, comités de trabajo o asambleas para organizar comités de trabajo y no permite que los ciudadanos extranjeros se desempeñen como funcionarios del sindicato. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideró que estos requisitos constituían obstáculos al derecho de sindicación. La ley prohíbe la discriminación a los sindicatos y protege a huelguistas y a sus dirigentes de represalias. La ley no exige la reincorporación de los trabajadores despedidos por causa de su actividad sindical pero exige el pago de indemnización y multas. La ley prohíbe el despido de trabajadores desde el momento en que un sindicato notifica al inspector de trabajo de su asamblea general hasta la formación de su primera junta ejecutiva, que son los primeros pasos en la formación de todo sindicato.

Todos los empleadores privados que tengan 30 o más trabajadores afiliados a un sindicato tienen la obligación de negociar colectivamente cuando el sindicato así lo solicite. Las grandes federaciones sindicales tradicionalmente han sido aliadas de partidos políticos puntuales pero no es obligatorio. La ley prohíbe el uso de criterios discriminatorios en la contratación. Además, prohíbe la tercerización,

incluida la subcontratación, los contratos con terceros y por horas, pero confiere una exención para tercerar los servicios que no constituyen parte integral de los procesos productivos de las empresas.

Hubo pocas restricciones al derecho a huelga de los trabajadores del sector privado, a pesar de exigirse un período de 10 días antes de poder declarar una huelga. La ley permite hacer huelgas de solidaridad o boicoteos de tres días si el Ministerio de Relaciones Laborales los autoriza. En algunas industrias, durante una huelga legal, los trabajadores pueden asumir control de una fábrica o del lugar de trabajo (con lo que termina la producción en ese sitio) y recibir protección de la policía durante la toma de control. En otros sectores, como el agrícola o el hotelero, donde se necesita a los trabajadores para brindar una “atención constante”, la ley exige un período de espera de 20 días a partir del momento en que se convoca la huelga y los trabajadores no pueden asumir el control del lugar de trabajo. Durante ese período, los trabajadores y empleadores deben ponerse de acuerdo con respecto al número de trabajadores necesarios para asegurar un determinado nivel de servicio y como mínimo el 20 por ciento del personal debe seguir desempeñando sus funciones a fin de prestar los servicios esenciales. La ley determina “la facultad del empleador de contratar personal suplente” solamente cuando los huelguistas se nieguen a enviar el número de trabajadores necesarios para prestar los servicios mínimos necesarios, aunque en la práctica esta ley no se hizo cumplir.

La ley no concede a la mayoría de los trabajadores públicos el derecho a huelga. La Constitución designa sectores estratégicos a los siguientes: salud, saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción de hidrocarburos, procesamiento, transporte y distribución de combustible, transporte público, correo y telecomunicaciones, en los cuales están prohibidas las huelgas. Algunos de los sectores definidos como estratégicos excedieron las normas que fija la OIT para los servicios esenciales. La ley incluye una disposición por la cual los huelguistas de estos sectores se exponen a penas de cárcel de dos a cinco años. La OIT ha señalado reiteradamente que esta ley podría llevar al trabajo forzoso como castigo por la participación en las huelgas pacíficas, una violación de las normas internacionales de trabajo.

Las medidas adoptadas por el gobierno para hacer cumplir la tutela por ley de los derechos de los trabajadores solían ser insuficientes y desequilibradas, con lo cual a veces no lograban disuadir a los empleadores de que tomen represalias con los trabajadores por sindicalizarse. El trámite de inscripción de un sindicato, que solía demorar solo unos días, ahora tarda semanas o más y es mucho más complicado, lo cual inhibe la inscripción de sindicatos. Los trabajadores individuales pueden elevar quejas contra los empleadores a la Inspectoría del Trabajo si todavía trabajan para la compañía, o ante los tribunales encargados de tutelar los derechos laborales si ya no trabajan para la empresa. Los sindicatos también pueden elevar las quejas a una junta tripartita de arbitraje (sindicato, empleador, gobierno) establecida para escuchar estas quejas. En general, los procedimientos se vieron sometidos a demoras prolongadas y apelaciones.

En la práctica, con frecuencia no se respetaron la libertad de asociación ni el derecho a la negociación colectiva. Se denunciaron varios casos en los cuales los trabajadores fueron despedidos por participar en actividades sindicales. No se denunciaron casos de violencia física ni amenazas a dirigentes sindicales ni a sindicalistas. Sin embargo, se recibieron numerosas denuncias por hostigamiento legal, incluso cargos de terrorismo presentados por el gobierno a los dirigentes laborales por participar en huelgas u otras actividades de protesta.

La tercerización fue común y los dirigentes sindicales y los empleados públicos indicaron que el usuario más común era el gobierno. Tanto el gobierno como las empresas privadas recurrieron a la

tercerización para evitar contratar a trabajadores con derecho a organizarse o a negociar colectivamente, si bien la tercerización es, en general, ilegal. Por ejemplo, las plantaciones de bananas por lo general tercerceaban la cosecha a empresas a corto plazo. Cuando los trabajadores intentaban organizarse o negociar colectivamente, las empresas que los empleaban se disolvían y dejaban protegida a la compañía original.

b. Prohibición de trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe toda forma de trabajo forzoso u obligatorio. El gobierno no aplicaba la ley con eficacia en todos los casos. Persistió el trabajo forzoso de menores y adultos y los inmigrantes, refugiados e indígenas eran los más vulnerables, en especial las mujeres de estos grupos. Según se informó, los niños y adolescentes indígenas eran obligados a mendigar y a realizar trabajo forzoso como empleadas domésticas y mineros (véase la sección 7.c.). Los hombres adultos eran víctimas de trabajo forzoso en el sector agrícola. En junio de 2010, el relator especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud denunció los trabajos forzados de adultos en la industria del aceite de palma y de los trabajadores domésticos.

En julio, el gobierno creó una unidad policial especializada de combate a la trata. No se disponía de datos sobre la cantidad de víctimas retiradas de trabajos forzados en el año.

Véase el informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas en www.state.gov/j/tip.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley fija en 15 años la edad mínima para realizar todo tipo de trabajo y en seis horas diarias y cinco días por semana el número máximo de horas que puede trabajar un menor. La ley enumera los trabajos que no son apropiados para los menores y prohíbe que éstos trabajen en condiciones peligrosas, como por ejemplo en la agricultura, en las minas, el servicio doméstico, los basurales, los mataderos o en empleos que exijan exposición a sustancias tóxicas o peligrosas o ruidos fuertes. La ley exige que los empleadores paguen a los menores los mismos salarios que reciben los adultos por trabajos equivalentes. Las sanciones por infracciones de las leyes de trabajo infantil incluyen multas de \$50 a \$300 para los padres o tutores y de \$200 a \$1.000 para cualquier empleador que contrate a menores de 15 años. En casos de infracciones reiteradas, se puede llegar a cerrar la empresa del empleador.

El Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Tribunal de Menores tuvieron la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de trabajo infantil y, aunque su aplicación siguió mejorando, continuó siendo insuficiente. Entre enero y julio, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes recibió 66 denuncias de trabajo infantil.

En marzo de 2010, el gobierno sumó a los inspectores de trabajo infantil al equipo ordinario de inspecciones laborales. La Unidad de Servicio Social Laboral del Ministerio de Relaciones Laborales supervisó el trabajo infantil en fábricas pero la aplicación de la ley en la mayoría de los sectores de la economía continuó siendo limitada. Además, el Ministerio de Minas y Energía tuvo un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Laborales para permitir a los inspectores hacer cumplir las leyes laborales y aplicar sanciones por infracciones en las minas.

En marzo de 2010, el gobierno anunció un programa, Ecuador sin trabajo infantil, dirigido a eliminar toda forma de trabajo infantil ilegal. El programa implicaba campañas de varios años dirigidas puntualmente al trabajo infantil en los basurales, la industria de las flores y la mendicidad. A diciembre de 2010, el gobierno había anunciado que prácticamente había erradicado el trabajo infantil en basurales, dato que confirmó la OIT como ampliamente preciso. El programa no solo retiró a los niños de los basurales sino que también trabajó con familias para inscribir a los niños en las escuelas y brindó asistencia a las familias. Además, el programa retiró a los niños de la calle y trabajó para aumentar la conciencia sobre la mendicidad infantil. Si bien gracias al programa se redujo la mendicidad, esta continuaba siendo común.

El trabajo infantil siguió constituyendo un problema grave en el sector informal. Más probablemente se encontraba a niños trabajando en plantaciones de bananas o de vendedores callejeros. Además, trabajaron en la producción de brócoli, caña de azúcar y fresas, así como en la fabricación de ladrillos y en la extracción de oro a pequeña escala. El trabajo infantil forzoso adoptó la forma de trabajo doméstico involuntario, mendicidad forzada y trabajos forzados en minas. Se obligó a algunos niños a cometer actos delictivos, como el narcotráfico, y fueron reclutados por bandas terroristas colombianas en la frontera norte.

En las zonas urbanas, muchos menores de 15 años trabajaban en empresas de propiedad familiar en el sector informal lustrando zapatos o como vendedores ambulantes. Otros niños trabajaron en el comercio, los servicios de mensajería, el servicio doméstico o mendigaban. Algunos niños muy pequeños, de cinco o seis años, a menudo vendían periódicos o dulces en la calle para ganar su propio sustento o para aumentar el ingreso familiar.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos halló que en 2009, había 374.000 niños trabajando en actividades no permitidas por ley, principalmente en zonas rurales o en el sector informal. En 2010, UNICEF calculó que el número de trabajadores menores ascendía a 340.000.

Véase también el informe del Ministerio de Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil en www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm.

d. Condiciones laborales aceptables

El salario mínimo mensual era de US\$264. El cálculo oficial para el umbral de pobreza era de US\$72,87 por mes. La ley estipula una semana laboral de 40 horas, ocho horas por día y dos días consecutivos de descanso por semana. Para quienes trabajan bajo tierra, como los mineros, la jornada laboral se reduce a seis horas por día, y pueden trabajar una hora extra por día con pago por hora extraordinaria. La remuneración adicional corresponde al 50 por ciento más del sueldo para el trabajo realizado entre las 6:00 de la mañana y la medianoche. Para el trabajo realizado entre la medianoche y las 6 de la mañana, corresponde el doble del sueldo básico, si bien los trabajadores que normalmente trabajan el turno noche reciben solamente una prima del 25 por ciento. La tasa de pago por horas extraordinarias corresponde también al trabajo realizado durante los fines de semana y días feriados. El máximo número de horas extraordinarias es de 4 horas diarias y un total de 12 por semana. Se prohíben las horas extraordinarias obligatorias. Los trabajadores tienen derecho a 15 días corridos de vacaciones por año, incluidos los fines de semana, más un día adicional por año de servicio después de los cinco años de antigüedad. Para las empleadas domésticas con cama adentro rigen otras reglas de horario y vacaciones.

La ley contempla la salud y seguridad de los trabajadores. El Código Laboral contiene las normas referentes a salud y seguridad. Los trabajadores no tienen derecho a retirarse del lugar de trabajo en situaciones que ponen en peligro su salud sin arriesgarse a perder el trabajo. Los trabajadores extranjeros y migrantes están sujetos a las mismas normas de trabajo.

El Ministerio de Relaciones Laborales se esmeró por mejorar el cumplimiento de las leyes laborales, aunque fueron comunes las infracciones. El cumplimiento es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Laborales y del Departamento de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El gobierno disponía de unos 250 inspectores, a cargo de hacer cumplir todas las leyes laborales, incluidas las del trabajo infantil. En el año, el Ministerio de Trabajo aumentó considerablemente la cantidad de inspecciones por infracciones laborales cometidas, las cuales pasaron de 10.000 inspecciones en 2010 a más de 26.000 en 2011. Los intentos de cumplimiento a veces se vieron empañados por la falta de experiencia de los inspectores recién contratados y la menor prioridad que asignan los inspectores al trabajo infantil.

Las inspecciones pueden ser programadas, aunque esto fue poco común, o se pueden generar a raíz de una denuncia de los trabajadores. Si un trabajador solicita una inspección, y un inspector del Ministerio de Relaciones Laborales verifica que hay un riesgo laboral, el inspector puede clausurar el lugar de trabajo. Por lo general, las inspecciones laborales se realizaron a partir de una denuncia, no como medida preventiva, y los inspectores no podían hacer visitas sorpresivas. En algunos casos, se rectificaron las infracciones pero, en otros, se interpusieron impugnaciones legales que retrasaron los cambios varios meses. En la práctica, las sanciones no fueron suficientes para disuadir las infracciones y por lo general no se hicieron cumplir.

Diversas ONG sostuvieron que las denuncias realizadas por inmigrantes y refugiados rara vez se investigaban. Los dirigentes sindicales y los dueños empresariales también sostuvieron que la corrupción era común entre los inspectores. En 2010, el Ministerio de Relaciones Laborales comenzó a implementar reformas destinadas a mejorar el cumplimiento de los derechos laborales, incluidos las inspecciones laborales, y se esmeró por aumentar la cantidad de trabajadores amparados por contratos, que percibían el salario mínimo y que estaban inscritos para recibir las prestaciones de seguridad social. En mayo se aprobó una ley por referéndum nacional que hacía obligatorio que los empleadores inscribieran a sus empleados en la seguridad social y fijaba sanciones penales por incumplimiento. El gobierno lanzó una enérgica campaña para inscribir a los trabajadores e inspectores laborales a fin de garantizar que los trabajadores tuvieran contrato y estuvieran inscritos en la seguridad social. La campaña incluía algunas visitas domiciliarias que realizaban los inspectores a fin de entrevistar a las empleadas domésticas y convocaba a audiencias a los empleadores si los inspectores hallaban una discrepancia con la ley. Si bien todavía quedaba mucha gente por inscribir, se registró un marcado aumento en la cantidad total de inscritos desde que se aprobó la ley en mayo.

La mayoría de los trabajadores trabajaba en el gran sector informal y en zonas rurales y no estaba regida por las leyes de salario mínimo ni de las prestaciones estipuladas por ley. No hubo ningún reglamento específico con respecto a normas de salud y seguridad en el sector agropecuario en pequeña escala. Los temas de salud y seguridad ocupacional eran más predominantes en el gran sector informal. El Código de Trabajo diferenció la salud y la seguridad de los mineros; sin embargo, no se hicieron cumplir las reglas de seguridad en las minas pequeñas que constituyen la gran mayoría de las empresas del sector minero. Los inmigrantes fueron particularmente vulnerables a condiciones de trabajo peligrosas y de explotación.

El gobierno reconoció que el número de denuncias de lesiones en el trabajo era gravemente inferior al número real. Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Laborales y el Ministerio de Salud, se denunciaban unas 15.000 lesiones laborales por año. La OIT calculó que el verdadero número debe rondar los 160.000. Según se informó, las contravenciones de seguridad fueron comunes en la industria bananera, la industria del aceite de palma, de la flor y de la extracción de oro, en particular en casos de exposición a sustancias químicas tóxicas. Varios accidentes en autobuses de larga distancia que provocaron varias muertes se atribuyeron, en parte, a la falta de cumplimiento del horario de trabajo de los choferes.

En 2010, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud denunció abusos graves y poca supervisión gubernamental en la industria del aceite de palma, donde muchos trabajadores eran migrantes colombianos. Los abusos incluían horas de trabajo excesivas, remuneración salarial muy baja o inexistente y condiciones de vida inhumanas. Se encontraron abusos también en la industria bananera, la industria de las flores y la de extracción de oro a pequeña escala.